

## INTELECTUALES, DEMOCRACIA, VIOLENCIA Y PAZ

Por Eduardo Posada Carbó

Hace ya unos diez años – el 20 de noviembre de 1992 -, un notable grupo de intelectuales le dirigió una carta pública a la guerrilla en la que le expresaban sin ambigüedades que “su guerra, comprensible en sus orígenes”, iba entonces “en sentido contrario de la historia”. Sigue siendo un documento de enorme significado. Por su contenido, de persistente validez. Y por quienes la suscribieron: Gabriel García Márquez a la cabeza.<sup>i</sup>

Repasemos su mensaje. Ante todo, ese heterogéneo grupo de escritores, académicos y artistas – que se reconocía de “izquierda”<sup>ii</sup> -, ponía “en tela de juicio la legitimidad y la eficacia” de la acción que la guerrilla sostenía “desde hace años”. *Su legitimidad*: la guerrilla – se lee en el documento - no es la expresión de “una voluntad popular libre”; sus instrumentos de guerra – “el secuestro, la coacción, las contribuciones forzosas” -, son “violaciones abominables de los derechos humanos”; “el terrorismo...es hoy un recurso cotidiano”; “la corrupción... ha contaminado sus propias filas”. *Su eficacia*: su “forma de lucha...en lugar de propiciar la justicia social... ha generado toda clase de extremismos”; “su acción ha fomentado un clima de confusión política e ideológica que ha terminado por convertir a Colombia en un campo de batalla donde la libertad de expresión más usual es la de las armas”.<sup>iii</sup>

Los intelectuales condenaban “con igual energía” los “extremismos” generados por la lucha guerrillera: “como el recrudescimiento de la reacción, el vandalismo paramilitar, la inclemencia de la delincuencia común, y los excesos de la fuerza pública”. El documento, no obstante, tenía un objetivo específico: enjuiciar de manera expresa la violencia guerrillera: “su guerra, señores, perdió hace tiempo su vigencia histórica”. Su publicación representó, como lo describió un informe de *El Tiempo*, “un hecho político y moral de una importancia incontestable en el país”.<sup>iv</sup>

Una década más tarde, ese “hecho político y moral”, entonces de tan reconocida importancia, parecería en principio apenas una nota de pie, marginal en nuestra historia, frente a la continuidad e intensificación de la violencia. Son escasas las referencias al documento, como si se hubiese borrado de la memoria colectiva, sin huellas ni vestigios de su ocurrencia.<sup>v</sup> Esta sería, sin embargo, una forma muy ligera y simple de juzgar el impacto de los hechos intelectuales, que por lo general sólo se hacen sentir de veras en el curso de las siguientes generaciones. Diez años después, me parece oportuno reflexionar sobre la posición adoptada por ese prestigioso grupo de intelectuales ante la violencia guerrillera. ¿Cuál fue su efecto sobre el clima de opinión nacional? ¿Sigue su mensaje conservando validez? ¿Y qué papel les corresponde a los intelectuales frente al porvenir del país?

Cualquiera que haya sido con anterioridad la posición de los intelectuales frente a las ilusiones de la revolución, dicho documento sirvió para marcar con nitidez, y en forma colectiva, su abierto rechazo al uso de la violencia para lograr fines políticos. Ese fue el mensaje a la opinión, dentro y fuera del país: se hacía claro, por si hubiesen dudas, que la violencia de la guerrilla en Colombia era ilegítima. Atrás quedaban los años de la “utopía armada”. “Hoy se puede decir que la soledad de los guerrilleros es

monumental”, concluyó entonces José Hernández su análisis en *El Tiempo*. Y hoy, diez años más tarde, esa soledad se mantiene, pero acentuada.

Importa apreciar muy bien el valor civilizador de ese movimiento intelectual que contribuyó a “deslegitimar”<sup>vi</sup> la violencia guerrillera. Las posiciones de extrema no encuentran notables apoyos intelectuales que convoquen simpatía social alguna. Por el contrario, como una y otra vez lo reiteran las encuestas, la inmensa mayoría de los colombianos rechazan la violencia de todos los grupos ilegales armados. La personalidad histórica del país sigue identificándose con ese retrato centrista de la nacionalidad ya clásico de Jaime Jaramillo Uribe.<sup>vii</sup> Ese clima de opinión dominante tiene ecos en el exterior, donde las acciones de la guerrilla son igualmente condenadas.

La “deslegitimación” de la violencia guerrillera en el discurso intelectual dominante no se tradujo, sin embargo, en un inmediato apoyo a las instituciones democráticas del Estado colombiano. Se tradujo sí en lo que Jesús Antonio Bejarano llamara “el falso juego de las ilegitimidades”, es decir esa tendencia en algunos círculos a equiparar la ilegitimidad de la guerrilla con la ilegitimidad del Estado<sup>viii</sup>.

Los juicios condenatorios por igual y sin matices de la guerrilla y el Estado colombiano son frecuentes. Y con esa frecuencia son así mismo simplistas, errados e injustos. Ni siquiera reparan en la falsedad del ejercicio al comparar dos organizaciones de naturaleza tan fundamentalmente distinta: la una, con su estructura militar y despótica, de jerarquías inamovibles cuyo mando arbitrario sólo responde a la fuerza de las armas; la otra, de formación compleja, bajo un liderazgo civil que sólo tiene una autoridad limitada por la misma estructura interna del poder y los cortos ciclos electorales, y sometido a las constantes presiones de la opinión pública y de una sociedad pluralista, con intereses diversos, que le exige prontas respuestas a sus múltiples problemas.

La “deslegitimación” de la violencia guerrilla tampoco se ha traducido siempre en una identificación clara de responsabilidades. Cuando no abarca por igual a la guerrilla y al Estado, el enjuiciamiento intelectual se dirige a ratos también contra toda la sociedad colombiana.<sup>ix</sup> Surge de este juicio el retrato de una nación “criminal”, “intolerante”, “horda salvaje”. Así, una conversación entre dos prestigiosas investigadoras – Marta Cecilia Vélez y María Victoria Uribe –, sobre el comportamiento de los “sicarios” se confunde pronto con una explicación general sobre la nacionalidad: “el colombiano no soporta la existencia del otro”.<sup>x</sup> No creo que sea pueril advertir el uso común de la primera persona en plural, adoptado por un buen número de líderes de opinión al referirse al problema de la violencia, como cuando, en sus celebradas memorias recientes, García Márquez observa que “ya desde entonces los colombianos nos matábamos los unos a los otros por cualquier motivo, y a veces los inventábamos para matarnos”.<sup>xi</sup>

No sería justo identificar todo el discurso intelectual dominante con los equívocos anteriormente anotados. Es posible además que una cita aislada no esté tomando el conjunto del contexto en que originalmente se produjo. Como es posible que la adopción de la primera persona en plural sea apenas un recurso literario para describir las enormes dimensiones del desangre nacional. Adicionalmente, es necesario reconocer en forma explícita los significativos avances intelectuales en ir más allá del

mero enjuiciamiento del comportamiento criminal de la guerrilla, como lo muestran los mismos esfuerzos de Jesús Antonio Bejarano al denunciar ese “falso juego de las ilegalidades”.

En una entrevista con Santiago Montenegro, el sociólogo Eduardo Pizarro Leongómez – uno de los firmantes de la carta de 1992 – destaca la existencia de “un déficit de reflexión democrática en Colombia”.<sup>xii</sup> Pizarro señala allí la brecha intelectual que sigue existiendo entre el rechazo de la violencia guerrillera y el reconocimiento de las bases legítimas de la democracia colombiana: “si bien, la intelectualidad ... progresista ya no considera a la guerrilla como una opción política y han roto con ésta, no han sabido valorar suficientemente las importantes tradiciones democráticas que existen en nuestra sociedad”. Tras criticar las condenas que hiciera la izquierda latinoamericana de la democracia liberal en décadas anteriores, Pizarro advierte cómo la intelectualidad colombiana se ha ido quedando a la zaga en ese proceso de rectificación continental: “lo grave es que la intelectualidad progresista en Colombia ha sido la última en América Latina en rescatar los valores democráticos”.

Diez años no han pasado en vano. Pizarro es uno de tantos intelectuales que vienen liderando la reformulación de la crisis colombiana, imposible de superar mientras sobreviva con fuerza ese lenguaje que niega en términos absolutos cualquier logro de nuestras tradiciones democráticas.<sup>xiii</sup> La violencia como medio de acción política es incompatible con la democracia y las libertades: sobre esto existe hoy el más amplio consenso social que mantiene marginados a los grupos armados ilegales. Pero las defensas de la democracia y las libertades hacia el porvenir requieren de mayor claridad y lucidez intelectual. El reto lo sugirió el historiador Jorge Orlando Melo en un breve ensayo, al cerrarse el siglo XX: “hace falta un discurso que sostenga la primacía de la democracia, por imperfecta que sea, sobre la fuerza de las armas”.<sup>xiv</sup>

### Referencias bibliográficas

---

<sup>i</sup> La carta, dirigida a la entonces Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, fue firmada por medio centenar de personas. Además de García Márquez, la firmaron, entre otros, Antonio Caballero, Fernando Botero, Nicolás Buenaventura, Fernando Botero, Eduardo Pizarro, Socorro Ramírez, Enrique Santos Calderón, Daniel Samper, Alvaro Camacho, Salomón Kalmanovitz, Jaime Garzón, Gonzalo Sánchez, Fernán González, José Antonio Ocampo, María Jimena Duzán, Luis Alberto Restrepo. Su texto completo fue publicado en *El Tiempo*, el 22 de noviembre de 1992, p.7A.

<sup>ii</sup> No soy amigo de las expresiones “izquierda” o “derecha”, pues con frecuencia se utilizan como adjetivos mutuamente descalificadores que niegan así la posibilidad del debate pluralista y constructivo. Traigo a cuento ese término porque así se reconocían algunos de los firmantes de la carta: “...son – somos – gente de izquierda, o que lo ha sido”, escribió en su columna Antonio Caballero, “Los abajo firmantes”, *Semana*, noviembre 17 de 1992.

<sup>iii</sup> *El Tiempo*, noviembre 22 de 2002. Podría argumentarse que la violencia guerrillera no sólo ha sido ilegítima e ineficaz, sino además “reaccionaria”. La carta de los intelectuales no llega a hacer esta afirmación pero lo podría sugerir su texto. Las observaciones de Malcolm Deas me parecen aquí apropiadas: “Como instrumento reformista, la violencia no sirve. Tampoco creo que ha acelerado los cambios positivos ocurridos en el país.... Sospecho – sin saber cómo probarlo – que el efecto final del conflicto armado ha sido reaccionario, que el país y sus políticas hubieran sido más progresistas sin la presencia del conflicto”, en sus “Siete tesis disidentes”, *Cambio*, junio 26 del 2000.

<sup>iv</sup> José Hernández, “La gran factura”, *El Tiempo*, noviembre 22 de 1992. La importancia de la carta fue reconocida por *El Tiempo* al destacarla como la noticia más importantes de su edición del 22 de noviembre: “Se guerra, señores, perdió vigencia histórica”, era el título que abría la primera página del periódico. También fue reconocida en el editorial de ese día “Nunca es tarde”. Véase también la respuesta de Antonio Caballero al editorial en *Semana*, diciembre 1 de 1992.

---

<sup>v</sup> Por supuesto que hay referencias, pero mi impresión es que son ocasionales. Véase, por ejemplo, Marc Chernick, “La negociación de una paz entre múltiples formas de violencia”, en Francisco Leal Buitrago, ed., *Los laberintos de la guerra. Utopías e incertidumbres sobre la paz* (Bogotá: Tercer Mundo, 1999), p. 25. Ciertamente el debate de opinión en la prensa no registró los diez años de su publicación.

<sup>vi</sup> Utilizo con cautela la expresión “deslegitimar”, pues no creo que la violencia guerrillera haya estado legitimada antes de 1992. El lenguaje dominante entre los analistas políticos suele al respecto ser equívoco y confuso.

<sup>vii</sup> Jaramillo Uribe, *La personalidad histórica de Colombia y otros ensayos* (Bogotá: El Ancora, segunda edición, 1994).

<sup>viii</sup> Bejarano, *Una agenda para la paz* (Bogotá: Tercer Mundo, 1995), pp. 137-38. Véase también mi ensayo “Sobre la legitimidad y la legitimación”, publicado en estas páginas, [www.ideaspaz.org](http://www.ideaspaz.org)

<sup>ix</sup> Para una colección de escritos recientes sin deslindes claros de culpabilidades, donde además un grupo de intelectuales se autodeclaran “responsables por omisión frente al actual conflicto bélico que agobia al país”, véase autores varios, *Las letras de la paz* (Bogotá: Intermedio Editores, 2001); la cita se encuentra en el Manifiesto de Caicedonia, p. 169.

<sup>x</sup> “La vida para los sicarios no es duración, es intensidad”, *La Revista, El Espectador*, noviembre 25 de 2001. La misma presentación de “La conversación” por los editores de la revista desplaza la preocupación hacia toda la colectividad, cuando nos presenta el encuentro como una reunión “para intentar entender *por qué los colombianos nos seguimos matando*”. (El subrayado es mío).

<sup>xi</sup> Gabriel García Márquez, *Vivir para contarla* (Bogotá: Norma, 2002), p. 459. Véase también mi ensayo publicado en estas páginas “¿Nos matamos los unos a los otros?”, [www.ideaspaz.org](http://www.ideaspaz.org)

<sup>xii</sup> “Una charla con Eduardo Pizarro Leongómez”, *Carta Financiera*, N. 122, agosto de 2002, p. 72.

<sup>xiii</sup> Esta no es la oportunidad para hacer tal balance. Pero el debate intelectual en Colombia ha dado grandes avances en medio de notables esfuerzos, a ratos imperceptibles debido a los sobresaltos que imponen los hechos de la violencia.

<sup>xiv</sup> Melo, “La paz: ¿Una realidad utópica?”, *Semana*, diciembre 13 de 1999.